

TRIBUNA ABIERTA

LA AMÉRICA LATINA-ESPAÑA: SOCIOS EN LA GLOBALIZACIÓN

FERNANDO GARCÍA CASAS

Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe

La América Latina-España: socios en la globalización

Desde el restablecimiento de la democracia a finales de los años setenta, España ha ido recuperando el lugar que le corresponde en la comunidad internacional. En este proceso ha tenido y tiene especial relevancia la relación de España con América Latina, que ha permitido potenciar sus intereses comunes y reforzar y expandir su identidad compartida. Esta cooperación —política, económica, cultural— constituye la piedra angular de la estrategia que España debe mantener para enfrentarse a los desafíos de la globalización en un mundo que exige soluciones comunes a problemas que no conocen fronteras.

PALABRAS CLAVE

España, Iberoamérica, Cooperación internacional, Globalización, Desarrollo.

Latin-America and Spain: Partners in the Globalization

Since the restoration of democracy in the late seventies, Spain has managed to gradually recover its place in the international community. The relationship between Spain and Latin-America has been of particular relevance in this process, and has allowed both to foster their common interests and strengthen and spread their shared identity. This political, economic and cultural cooperation represents the cornerstone of the strategy that Spain must follow in facing the challenges posed by globalisation in a world requiring common solutions to problems that know no borders.

KEY WORDS

Spain, Ibero-america, International cooperation, Globalisation, Development.

Fecha de recepción: 15-09-2017

Fecha de aceptación: 30-09-2017

Los Estados elaboran su política exterior teniendo en cuenta el entorno internacional en el que se mueven. No existe una política exterior sólida y viable que no acierte a amoldarse a las fuerzas y condicionamientos que determinan el sistema internacional en cada momento histórico. Sistema definido como conjunto de unidades interconectadas entre sí, de manera que cambios en algunos de sus elementos producen cambios en los otros elementos del sistema, lo que encuadra las respuestas de las políticas exteriores de los Estados. Como nos ha advertido Kenneth Waltz, con el tiempo los Estados aprenden a plegarse a sus condicionamientos porque ven las desdichas de aquellos que pretendieron no conformarse a los dictados del sistema internacional.

Si aceptáramos como punto de partida de nuestro análisis esta concepción (neo) realista de las relaciones internacionales, convendríamos en que una estrategia —ese universo de ideas y convicciones que sirve de marco general de referencia para la

toma de decisiones— bien diseñada de nuestra política exterior iberoamericana debería partir de la comprensión y correcta valoración de los grandes cambios que se están produciendo en el mundo y que impactan fuertemente en América Latina, Europa y España, y por tanto en sus relaciones.

Desde el restablecimiento de la democracia a partir de 1979, España se ha proyectado hacia el mundo con un fin anhelado ampliamente por la sociedad española: reencontrarse con la Europa integrada y recuperar su lugar en la Comunidad Internacional. Este objetivo se ha cumplido con creces. La Unión Europea no puede hoy concebirse sin la presencia de España. El reencuentro con América Latina en democracia, igualdad y libertad ha permitido la creación y desarrollo de la Comunidad Iberoamericana. También, en nuestro digno e intenso papel de facilitadores de la convergencia, hemos trabajado para que Latinoamérica y Europa sean hoy socios estratégicos.

Todo esto es cierto, pero precisamente en razón de ese éxito el modelo de la política exterior de la Transición parece haber agotado parte de su potencial, así como su proclividad natural al consenso. Somos hoy testigos de cambios profundos en la estela de una crisis económica sin precedentes, que generan movimientos de rechazo de la globalización que propugnan un retorno a fórmulas populistas neoproteccionistas y nacionalistas.

La globalización no es un fenómeno nuevo. Frente a lo que generalmente se cree, el verdadero comienzo de la globalización no es tanto la Ruta de la Seda como la Ruta de la Plata, que unió durante dos siglos y medio a tres continentes a través de dos océanos, pues incluyó a América, lo que aquella no había hecho.

Durante siglos, la interacción global se canalizó a través de los intercambios comerciales y los flujos de capital. Hoy, es el cambio tecnológico el que acelera los intercambios globales y transforma su naturaleza. El comercio representa hoy la mitad del PIB mundial, cuando en los 70 representaba apenas un 20 %. La mayoría de los productos industriales no son ya puramente nacionales, sino que incorporan a través de cadenas de valor global materias primas, componentes, tecnologías y servicios de diferentes países y continentes. Al tiempo, el mundo se enfrenta hoy a crecientes desafíos transnacionales: desde crisis migratorias a amenazas terroristas, crisis financieras, pandemias o el cambio climático.

Aunque los efectos positivos de la globalización son difícilmente contestables —un mundo más conectado ofrece mejores oportunidades—, es cierto que implica nuevos desafíos, por la percepción de que esos beneficios no se distribuyen de forma igualitaria entre las personas y las regiones del mundo. La globalización acelerada genera incertidumbre e inquietud en sectores que sienten que su empleo y bienestar están amenazados por la competencia de otros países y regiones, o que amenaza sus identidades y formas de vida tradicionales.

En el ámbito de las relaciones internacionales, la globalización desbocada, los cambios producidos en los equilibrios de poder tras la caída del muro de Berlín y la mayor interdependencia de sociedades afectadas por un creciente peso del individualismo están afectando al papel tradicional de los Estados, apuntando hacia un nuevo orden internacional. Un orden que atraviesa un periodo de transición e incertidumbre que, partiendo desde un sistema de dos superpotencias, con un interrogno

de hegemonía de un solo país, se encamina a un sistema multipolar que aún no acaba de definirse.

El impacto que todas estas transformaciones tienen en las relaciones internacionales es profundo, y también en Latinoamérica. Nos equivocáramos si creyéramos en la existencia de un determinismo estructural rígido en las relaciones exteriores que deja escaso margen a la política exterior de los Estados. La historia muestra que, cuando el contexto internacional es menos restrictivo y las cuestiones de seguridad menos determinantes, los responsables políticos tienen un mayor abanico de opciones para formular sus preferencias estratégicas de política exterior. Así, en el caso de Estados Unidos, cediendo la preocupación central respecto a la contención del comunismo y la influencia soviética en América Latina, se fue mitigando y permitió dar paso a nuevas prioridades de política exterior como el fortalecimiento de la democracia, la apertura de mercados y la lucha contra el tráfico de drogas. Desde el lado latinoamericano, el final de la bipolaridad confirió una mayor autonomía a los países de la región para diversificar sus relaciones con otros actores fuera del hemisferio, como ocurrió con Europa y posteriormente también con China, aunque en este caso con un componente marcadamente comercial.

En España, en cuatro décadas fuimos capaces de pasar del aislamiento a la integración en la Unión Europea; de la autarquía a la apertura; de la dictadura a la democracia; y del centralismo a la descentralización.

El triunfo de Trump ha sido explicado por un buen número de analistas como la expresión más nítida del rechazo a ciertas formas de globalización por aquellos que se sienten perdedores y perciben su bienestar e identidad amenazados. Cierta indefinición en la ejecución de políticas y cumplimiento de promesas electorales de la nueva Administración norteamericana sugiere una vez más la dificultad de llevar a término modelos rupturistas de política exterior que pretendan desconocer las imposiciones del sistema internacional. El caso concreto de México es un buen ejemplo. La agresiva retórica inicial parece ir paulatinamente cediendo a un reacomodo de las posiciones en los temas más sensibles, como la inmigración o el comercio.

Otro tanto cabe decir de la inflexión de la política norteamericana hacia Cuba anunciada en el discurso del presidente Trump en Miami el 16 de junio. Habrá que ver hasta qué punto su aplicación supone la paralización del proceso de recomposición de

las relaciones, lanzado por Obama, que generó tantas expectativas en la región. No es un azar que la nueva política haya sido recibida por La Habana con una declaración gubernamental en términos duros, pero en tono respetuoso y constructivo.

Más significativo aún si cabe es la celebración de la Conferencia en Miami sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, del 14 al 16 de junio, organizada conjuntamente por EE.UU y México, que vino a confirmar la voluntad de la nueva Administración estadounidense de seguir prestando especial atención a la región centroamericana, poniendo un mayor énfasis en los temas de seguridad.

Es en este complejo e interdependiente escenario en el que nos toca redefinir y renovar nuestra política iberoamericana. Logrados ya, con notable éxito, los objetivos de la agenda exterior de la Transición, se impone la necesidad de consolidar nuestra presencia en el mundo (y de forma muy especial en América Latina) y preservar y promover nuestros valores e intereses estableciendo claras prioridades y ejes de actuación.

Es cierto que la crisis económica hizo difícil mantener con el mismo ritmo nuestra creciente presencia e influencia en el concierto internacional. Le ocurrió a una Europa que estaba atravesando sus momentos más difíciles y repercutió también, en mayor o menor medida, en todos sus miembros. Nuestro prestigio y capacidad de influencia exterior, en particular en América Latina, para muchos de cuyos países hemos sido un referente de transición política ejemplar y de modernización social y económica, se vieron seriamente afectados. Tan cierto como que la salida de la crisis con la notable recuperación económica experimentada en los últimos años, y las buenas predicciones para el futuro, están transformando rápidamente ese escenario, de modo que España vuelve con empeño al escenario internacional, en particular en Iberoamérica.

En estas circunstancias en las que el orden democrático liberal parece cuestionado desde uno y otro lado del espectro político, nuestra respuesta —junto a la de Europa— a la crisis y a los desafíos de la globalización no puede ser ni el aislamiento ni la inacción: ni poner barreras o cerrar fronteras, ni tampoco tener fe ciega en supuestas propiedades mágicas de la capacidad de autorregulación de los mercados. La respuesta exterior de Europa y España a los desafíos de la globalización debe ser la cooperación internacional para conformar y regular esa globalización, promoviendo un orden mundial equitativo basado en instituciones multilaterales y

reglas comunes que permitan a los países encontrar soluciones comunes a problemas que hoy no conocen fronteras. Un orden mundial en el que la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la justicia social sean innegociables.

Estoy convencido de que América Latina es hoy nuestro mejor aliado para promover esa visión del mundo, y para que la defensa del multilateralismo y del libre comercio sea escuchada en el contexto actual. México, Brasil y Argentina —que lo va a presidir el próximo año— son miembros del G-20, con España en calidad de invitado permanente, y tienen un interés manifiesto en defender este orden multilateral y abierto. Nuestros valores e intereses convergen.

Los estudiosos de las relaciones internacionales nos enseñan que el juego simultáneo de valores e intereses no siempre es fácilmente conciliable. Hay un principio rector de la política exterior española que se manifiesta con especial intensidad en las relaciones iberoamericanas: la de ser una política que intenta compaginar de forma equilibrada la dimensión pragmática (intereses) y la dimensión normativa (valores e identidades) de esas relaciones.

Nuestra relación natural con Iberoamérica nos ayuda a superar ese dilema: nuestra identidad común nos permite potenciar nuestros intereses comunes, mientras que estos intereses contribuyen simultáneamente a reforzar y expandir nuestra identidad compartida. Celestino Arenal ha observado que cuando surgen contradicciones entre los valores y los intereses ha sido la dimensión identitaria la que ha determinado la búsqueda de un equilibrio entre los mismos. Así ha sido, en efecto, lo que explica la capacidad que la política exterior española ha tenido para que las relaciones con los diversos países iberoamericanos hayan podido desarrollarse de forma constructiva y respetuosa con independencia del signo político de los gobiernos en cada momento.

Más allá de esta referencia identitaria como una constante de la política exterior, es recurrente formularse la pregunta de si contamos con una verdadera política exterior hacia Iberoamérica que cuente con una estrategia definida capaz de articular nuestros objetivos, instrumentos y decisiones en la región.

No es infrecuente encontrarse con análisis y opiniones que niegan que más allá de la constante retórica del discurso oficial pueda hablarse de la existencia de una política exterior española, en el pleno senti-

do de su significado, con Iberoamérica. Se aduce que América Latina ha perdido protagonismo en una política exterior marcada por el retraimiento y el impacto de la crisis. Según un sector de esta mirada crítica, serían los intereses económicos y no una estrategia política los que marcan la agenda de la política exterior española hacia América Latina.

Fue el Gobierno de la anterior legislatura quien aprobó, por primera vez desde el comienzo del periodo democrático, la Ley de Acción Servicio Exterior del Estado, que entró en vigor el 27 de marzo de 2014. Esta ley establece el marco de las actuaciones del Estado en las relaciones internacionales y cuatro dimensiones genuinas de la acción exterior española: la europea, la iberoamericana, la atlántica y la mediterránea. Con relación a Iberoamérica, se afirma que *«es primordial lograr una adecuada coordinación de la Acción Exterior de España con los Estados que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones»* y que esa dimensión genuina de nuestra proyección exterior *«constituye una un empeño irrenunciable para España»*.

La Ley se acompaña de un documento de Estrategia de Acción Exterior que describe a América Latina como una región en ascenso, políticamente estable, económicamente próspera y con vocación de jugar un papel en el mundo que emerge. Su pujanza, su dinamismo y su sólida inserción en la economía y el comercio mundiales la convierte en una de las regiones con mayor potencial de todo el mundo.

Sostener que América Latina es una tierra de oportunidades es hoy más que una frase retórica. América Latina ha experimentado en las últimas décadas una gran transformación económica y social en un contexto de notable estabilidad económica y política. El crecimiento económico sostenido, impulsado por el ciclo alcista de las materias primas, ha permitido asimismo reducir de forma significativa los niveles tradicionales de pobreza y desigualdad. Entre 2003 y 2013, el crecimiento del PIB de América Latina y el Caribe fue superior al de la Unión Europea, pero a partir de 2011 las condiciones externas menos favorables —caída de los precios de los productos básicos— y problemas internos de algunos países generaron un prolongado período de desaceleración del crecimiento económico que solo ahora empieza a revertir. El PIB ha vuelto en 2016 a retomar la senda de crecimiento (1,4 %) y todo apunta a que esta tendencia continúa en los próximos años.

Los retos económicos y sociales de América Latina continúan siendo enormes. Lo difícil para una eco-

nomía no es tanto crecer intensamente en un momento determinado como mantener en el tiempo tasas de crecimiento elevadas. La historia de América Latina es la de la confirmación de esta tesis por la vulnerabilidad tradicional de la región frente a *shocks* externos y a un entorno político predominante en general poco propicio para asentar una cultura de estabilidad macroeconómica.

A pesar del cambio de ciclo económico, un menor crecimiento y las crecientes incertidumbres existentes en el entorno internacional, subsisten razones para ser optimistas y confiar en que esa dinámica pendular tradicional no va a repetirse una vez más. En primer lugar, porque el objetivo de estabilidad macroeconómica ha ido imponiéndose en la mayoría de las agendas económicas de la región; y también porque se aprecian señales alentadoras de que la reprimarización de un número significativo de economías de la región puede superarse sin acudir a estrategias anteriores de industrialización fracasadas, como el de la sustitución de importaciones, impulsando, a cambio, políticas que generen un entorno productivo abierto, dinámico y competitivo.

Subsisten, sin embargo, problemas y desafíos muy graves que lastran las posibilidades de desarrollo de América Latina: la persistencia de niveles inaceptables de desigualdad a pesar de los notables avances sociales de los últimos años; la creciente inseguridad, la corrupción y la debilidad de parte de las estructuras institucionales.

Con todo, América Latina se presenta hoy ante el mundo como una región que ha sabido aprender de las lecciones del pasado, que ha sabido desterrar tentaciones golpistas y ha mejorado notablemente la calidad de sus democracias y el manejo de herramientas macroeconómicas, ganándose una merecida mejora de su reputación y credibilidad en la comunidad internacional y en los mercados.

Paradójicamente, la incertidumbre sobre el rumbo de las relaciones de Estados Unidos con América Latina se da en un momento en que la región parece apostar cada vez más por enfoques abiertos e integradores. En este entorno de crecientes presiones proteccionistas, contar con una región como América Latina, en crecimiento, cada vez más decidida a insertarse en la globalización, estable y alineada en valores e ideales con el resto del espacio atlántico, es una oportunidad que España y Europa no deberíamos desaprovechar.

Reconocer este proceso de transformación y modernización de América Latina con el trasfondo de un

mundo en mutación por los efectos de la globalización nos empuja a adoptar un enfoque renovado de las relaciones de España con la región; una relación más simétrica y flexible en su diseño que sepa aunar las diversas dimensiones en que esta se despliega: desde la estrictamente bilateral (según el Gobierno y características de cada país), a la subregional (SICA, Alianza del Pacífico), regional (España es observador permanente en la Organización de Estados Americanos, OEA) y birregional (Unión Europea, América Latina y Caribe). Todo ello sin olvidar ese ejercicio específico de diálogo y cooperación de la igualdad que son las Cumbres Iberoamericanas, en sus veinticinco ediciones ya celebradas.

La anterior Canciller argentina, Susana Malcorra, describía de forma expresiva ese papel especial que España (y Portugal) pueden desempeñar en las relaciones entre la UE y América Latina al aludir al hecho de que dada su condición de países iberoamericanos tenemos un pie a un lado y otro del Atlántico.

Existe, pues, una política y una estrategia que gobiernan y encauzan en todas sus facetas nuestra relación tan rica y pluridimensional con América Latina, y que, a su vez, cuenta con un hilo conductor que impregna todas sus manifestaciones: la promoción y defensa de los principios de democracia, desarrollo y cohesión social, considerados como inseparables y fundamento del progreso y de la paz. Una política de Estado que debe ser asumida y compartida por los principales actores políticos, económicos y sociales de nuestro país, que deben tener continuidad en el tiempo.

Esa relación renovada abarca gran parte de los ámbitos de actividad humana, implica la lengua, cultura, ciencia e innovación; las relaciones económicas; la cooperación para el desarrollo y el fomento de las relaciones entre la UE y América Latina. Unos objetivos para cuya consecución se establece una larga serie de Acciones del Estado en todos aquellos ámbitos y políticas con una dimensión exterior: Defensa, Derechos Humanos, Cooperación para el Desarrollo, en Asuntos tributarios, Justicia, Seguridad Pública e Interior, Investigación, Desarrollo e Innovación, Asuntos económicos, comerciales, financieros y apoyo a la internacionalización de la economía española, Asuntos migratorios, Cultura, Educación, Turismo, Medioambiente y cambio climático, Salud, Energía, Infraestructura y transporte. La tarea y reto fundamental de la política exterior que corresponde es la de coordinar la

diversidad de actuaciones de los diferentes ministerios y órganos de la Administración central del Estado competentes para asegurar que se insertan en un plan estratégico, preservando su coherencia, eficacia y visibilidad.

Detrás de esta estrategia y definición de objetivos con relación a América Latina late el reconocimiento de que es preciso que España y Europa recuperen la iniciativa si no quieren perder su influencia y posición frente a otros actores emergentes en la región, como China.

Tras el periodo iniciado en los 90 con el Consenso de Washington, los países latinoamericanos iniciaron un proceso gradual de liberalización y desregulación de sus economías que promovió la llegada de capitales extranjeros a sectores antes protegidos y resguardados de la competencia extranjera. Las empresas españolas se convirtieron en actores principales de un proceso que hizo a España uno de los principales inversores en América Latina. Este proceso ayudó a la región a crecer modernizándose, importando tecnología y mejorando su infraestructura, al tiempo que permitió a las compañías españolas alcanzar niveles de rentabilidades históricas y dio a España un notable nivel de influencia.

América Latina se convirtió en una región más autónoma, más segura de sí misma, que supo también ir atrayendo paulatinamente el interés de otros actores prácticamente ausentes en la región hasta entonces, como es el caso de China. Aunque la crisis de 2008 fue la causante del auge de las materias primas que se había iniciado antes, es a partir de esa fecha en la que la burbuja inmobiliaria estalló en EE.UU. y Europa (especialmente en España) cuando China comenzó a afianzar su presencia en la región. Al tener un nivel de endeudamiento privado bajo, China pudo lanzar un programa de estímulo hacia ciertos sectores como los de la construcción y las infraestructuras, que transformó al país en un gran consumidor de productos básicos, desde cobre y hierro, hasta petróleo, soja y grano que benefició de forma muy especial a América Latina. China aprovechó estos años de auge para aumentar y solidificar su influencia en América Latina, cerrando diversos acuerdos de cooperación que le garantizaban el suministro de las materias primas que precisaba para seguir creciendo.

El impulso a las relaciones económicas entre China y América Latina ha sido tal que el comercio bilateral pasó de 12.600 millones de dólares en 2000 a 263.600 millones en 2014, convirtiéndose en el segundo socio comercial de América Latina y des-

plazando a la UE. Los intercambios comerciales entre China y América Latina se han multiplicado por 20 en la última década, y se han incrementado significativamente sus inversiones y financiación.

China es ya el primer socio comercial de Brasil, Perú y Chile, ha prestado 65.000 millones de dólares a Venezuela, está detrás de grandes proyectos de infraestructura como el canal seco interoceánico y el doble ferrocarril entre los océanos Atlántico y Pacífico. España, Estados Unidos, Alemania y Francia aportan tecnología y solvencia, pero no es menos cierto que hay proyectos que China financia íntegramente y aporta mano de obra en su totalidad

Sería un error creer que la presencia e influencia china en la región es un fenómeno pasajero, tributario del *boom* de las materias primas y de las proclividades ideológicas de ciertos Gobiernos de la región. A pesar del cambio de signo ideológico de los Gobiernos de Argentina y Brasil, los acuerdos económicos y concesiones de préstamos chinos siguen teniendo una importancia notable. Todo ello refuerza la creciente importancia estratégica de América Latina que se está produciendo con el desplazamiento del eje económico mundial del océano Atlántico al Pacífico y al Índico al dejar de ser periférica para ocupar un lugar central.

Aunque la creciente presencia comercial e inversora de China en América Latina sea considerada generalmente como un reto mayor para Europa, no tiene por qué ser necesariamente un factor negativo para España o Europa. Abre oportunidades de cooperación, siendo España y sus empresas internacionales un buen puente para las inversiones chinas, y puede a su vez ser relevante para la mejora de las infraestructuras de la región, lo que favorece a las empresas españolas y europeas allí asentadas.

En todo caso, España (y Europa), a medida que van dejando atrás los efectos de la crisis económica que les ha atenazado durante demasiado tiempo, están en condiciones de recuperar el tiempo e influencia perdidos en un momento en el que la presencia china podría comenzar a ser cuestionada. Si el giro de la política de EE.UU. puesto en marcha por Obama con la normalización de las relaciones entre EE.UU. y Cuba obligaba a España y a la UE a avanzar en sus relaciones con América Latina, la incertidumbre sobre el rumbo real que adoptará la Administración Trump supone abrir un compás de espera ante un panorama previsiblemente distinto que será necesario reevaluar.

Pero sería un error pretender que un escenario de desencanche norteamericano de la región favorecería los intereses de Europa y España, que podrían (supuestamente) aprovecharse de ese «vacío» y suplirlo con una mayor presencia e influencia. Un vacío que en todo caso podría ser más fácilmente ocupado por una China alentada por esta súbita e inesperada retirada americana cuando precisamente ella empezaba a perder su capacidad de influencia en la región.

Pese a algunos planteamientos y anuncios preocupantes de la Administración Trump respecto a sus políticas hacia Latinoamérica, España debe seguir apostando por la prioridad estratégica que conforma ese triángulo fundamental de nuestra política exterior constituido por España-Estados Unidos-América Latina. Los tres vértices de este espacio atlántico ampliado, sin olvidar su conexión con Asia y con el Pacífico, están sometidos a profundas transformaciones que nos afectan y que aspiramos a orientar en una dirección positiva. EE.UU. y la Unión Europea son los dos actores extrarregionales más importantes para América Latina. La relación transatlántica es la segunda vertiente de esa prioridad natural que para España son las Américas. España debe aprovechar su situación estratégica en el espacio atlántico, cifrada en su presencia en instituciones relevantes del Norte y su proximidad cultural con el Sur, para contribuir al desarrollo de la cooperación en un marco atlántico integral, y alentar la cooperación Sur-Sur necesaria para asegurar el crecimiento y la estabilidad en la región.

Un compromiso renovado y fortalecido de España con América Latina tiene que traducirse en una relación sinérgica que, apoyada en sólidos lazos políticos y diplomáticos, sea capaz de articular de forma sinérgica y armónica nuestros intereses comunes económicos y desarrollar un nuevo modelo de cooperación al desarrollo diferenciado que tenga en cuenta las diferentes situaciones particulares de cada país de la región y los nuevos retos y objetivos de la Agenda 2030, con sus 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), 169 metas y 232 indicadores.

En el ámbito de las relaciones económicas son esenciales las inversiones y empresas españolas en el desarrollo de la economía latinoamericana. Son unas inversiones que han demostrado a lo largo de años ser fiables, competitivas y con un alto nivel de compromiso.

Desde 2014 estamos asistiendo a un repunte del flujo y del *stock* de inversión española en América

Latina. Sus magnitudes se han situado en los últimos años en torno a los 10.550 millones de flujo anual, con un *stock* acumulado en 2015 de 143.611 millones de euros, lo que representa más del 30 % de la inversión agregada de España en el mundo. Los principales en *stock* de inversión española son Brasil (25,26 %), México (22,82 %), Venezuela (19,19 %), Chile (10,79 %), Argentina (6,82 %), Colombia (3,87 %) y Perú (2,76 %).

Por flujos de inversión, en 2016, los principales receptores han sido México (61,91 %), Uruguay (14,51 %), Brasil (7,94 %), Chile (6,56 %), Panamá (2,15 %), Venezuela (1,76 %) y Costa Rica (1,67 %).

Las inversiones y presencia de nuestras empresas en Latinoamérica son un factor muy importante para el desarrollo, modernización, transferencia de tecnología e inserción internacional de sus economías latinoamericanas, y así es reconocido generalmente por sus Gobiernos con independencia de su color político o ideología. Esa visión no sería completa sin recordar que las contribuciones superan los 40.000 millones de euros anuales.

En el marco de sus programas de responsabilidad social corporativa, nuestras empresas desarrollan en la región actuaciones de valor social o medioambiental por importe superior a 1.000 millones de euros anuales, de cuyo impacto se benefician directamente millones de personas. Y también hay que hablar de las inversiones de las empresas multilatinas en España, en particular de México y Brasil. Todo ello genera nuevas e importantes interdependencias económicas entre España y América Latina, con mayor intensidad que en cualquier otra época de los últimos 200 años de vida independiente.

Para España, esta presencia de nuestras grandes empresas en América Latina ha sido de vital importancia para afianzar el proceso imparable de internacionalización de nuestra economía, aumentar sus mercados y competitividad internacional, y ha desempeñado un papel clave en la salida de la crisis. Se trata, en definitiva, de una sinergia enormemente positiva de beneficio mutuo, un círculo virtuoso que se erige así, de forma natural, en uno de los grandes ejes de nuestra política exterior en América Latina.

El volumen de las exportaciones españolas a ALC en 2016 se cifró en 13.535,23 millones de euros, que representan el 5,32 % del total de nuestras exportaciones. Las importaciones alcanzaron los 13.595,53 millones de euros, equivalentes al 4,97 % del total, lo que arroja una tasa de cobertura del 99,56 %.

Esta tasa, tradicionalmente favorable para Latinoamérica, ha ido equilibrándose desde 2013, debido sobre todo a la disminución en cantidades, pero sobre todo en precio (caída materias primas) de las exportaciones de esa región.

En el *ranking* europeo de exportaciones (Eurostat, 2014) España figuraba en 2.º lugar con un 12,8 % del total, por debajo de Alemania (27,5 %) y seguida por Italia (12,8 %) y Francia (10,7 %). En el capítulo de importaciones solo nos supera Países Bajos (lo que debe matizarse por el efecto «Róterdam») 17,8 % y 18,4% respectivamente.

Sin embargo, la magnitud de esas cifras, aunque por sí mismas relevantes, representan apenas un 6 % de nuestros intercambios con el mundo y están aún muy por debajo de su potencial.

Nuestra estrategia para potenciar las relaciones económicas con América Latina se centra en completar y modernizar la red de acuerdos de asociación y comercio existentes. Apostamos por una profundización de nuestra asociación económica que propicie la creación de un entorno favorable para las inversiones. Estamos comprometidos para apoyar con todos los medios a nuestro alcance los programas nacionales de transformación de sus estructuras productivas a fin de abordar el desafío de su modernización, diversificación e incremento de la productividad.

He podido oírlo directamente de sus dirigentes y empresarios: España está en una situación privilegiada para ayudar a los países latinoamericanos a posicionarse mejor en las cadenas de valor global. Iniciativas como la alianza para la productividad propuesta por España, con vistas a la próxima cumbre Unión Europa-América Latina y Caribe (UE-CELAC, que se ha visto aplazada por la profunda crisis que vive Venezuela y la reacción regional que suscita), responden a dicho objetivo.

En paralelo con todo lo anterior, conviene destacar nuestro compromiso continuado y constante con el desarrollo de la región. América Latina ha sido y continúa siendo destino preferente de la cooperación española. La suma de los recursos canalizados a la región en los últimos 20 años a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo supera los 15.000 millones de euros.

El perfil de la cooperación española en América Latina y el Caribe se está renovando para adaptarse a las nuevas orientaciones estratégicas y compromisos de la Agenda 2030. Diferenciación, concentración, eficacia y orientación a resultados de desarro-

llo, mayor cooperación con las ONGD y sector privado, rendición de cuentas y mayor transparencia son los parámetros principales de este perfil renovado de la cooperación.

A pesar de los grandes progresos económicos y sociales experimentados por América Latina en las dos últimas décadas y de su clasificación como países de renta media, subsisten desafíos estructurales de desarrollo muy significativos como la desigualdad, nuevo incremento de los niveles de pobreza, baja productividad de sus sistemas productivos y un tamaño desmesurado del mercado laboral informal, o la seguridad ciudadana. El Consenso Europeo para el Desarrollo de 2017 propugna un nuevo modelo de asociación con los países en desarrollo más avanzados que serán claves para promover la aplicación de la Agenda 2030 a través de una agenda de cooperación más amplia que vaya más allá de la cooperación financiera y tenga en su centro el diálogo sobre políticas públicas y reformas.

Con esta orientación se está rediseñando la cooperación con los países de renta media, a los que pertenece la mayor parte de América Latina y el Caribe, mediante acuerdos de nueva generación, que permiten superar la posición tradicional donante-receptor a través de nuevas modalidades de cooperación, como la triangular o las asociaciones público-privadas para el desarrollo (APPD).

La naturaleza multidimensional del desarrollo sostenible definido en la Agenda 2030 ha generado un debate sobre el índice apropiado para medir el nivel de desarrollo de un país. Va ganando peso la idea, defendida también por España, de que el PNB per cápita por sí mismo no puede medir adecuadamente el progreso ni refleja deficiencias como brechas estructurales, desigualdad, disparidades regionales, vulnerabilidades geográficas y climáticas o capacidad institucional. Como nos advierte el PNUD, los países no se «gradúan» por alcanzar un determinado nivel de ingresos.

Es preciso lograr un progreso multidimensional que permita erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones, superar las vulnerabilidades y lograr

la sostenibilidad a largo plazo, expandiendo la frontera de la definición del bienestar.

Estamos ante un claro momento de esperanza en las relaciones birregionales entre la Unión Europea y América Latina. Además de los Acuerdos de Asociación ya existentes de la UE con Centroamérica y diversos países andinos, la modernización en curso de los acuerdos ya existentes con México y Chile y el recientemente concluido Acuerdo de diálogo político de cooperación con Cuba son señales que apuntan a un reforzamiento de la relación birregional y a una decidida apuesta por el multilateralismo.

Si a ello se añade la posibilidad cierta de que, tras 28 años de dudas y negociaciones, el nuevo Acuerdo Unión Europea-Mercosur pasa a configurar el área de libre comercio más grande del mundo, podemos concluir que estamos ante una reubicación de estos dos grandes ámbitos geográficos en las relaciones internacionales. Para hacernos una idea de lo que este Acuerdo podría cambiar, baste decir que, una vez en vigor, los exportadores de la UE ahorrarán unos 4.000 millones de euros al año en aranceles por sus exportaciones a Mercosur.

En definitiva, esta visión renovada de las relaciones de España con América Latina implica a toda la sociedad: el Estado, las Comunidades Autónomas y los Entes Locales, pero también, y de manera relevante, a empresas, ONG, universidades, sindicatos, fundaciones y partidos políticos.

Así, podremos decir, con mayor intensidad que en otras épocas, que estamos unidos por cinco grandes vectores: las relaciones políticas; las relaciones económicas, empresariales, de comercio e inversión; la cooperación al desarrollo y la cooperación técnica en sus múltiples versiones; la cultura, con un patrimonio compartido que reúne identidad, diversidad, valores y también es un motor económico; y, finalmente, cómo no destacar el incesante flujo de personas y familias entre nuestros países y nuestras dos orillas, flujo que nos permite aseverar que, esta vez y para siempre, estamos unidos por las migraciones.